

Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, Sr. Carlos Aldana Fuentes, ha elevado a esta Corte Suprema compulsas electrónicas de los autos criminales N°3-2011 (acumulado N°4-2021), caratulados “Adelino Pérez Navarrete”, con la finalidad de autorizar la ampliación de la extradición del ciudadano chileno Walther Klug Rivera, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco de Gendarmería de Chile.

En particular, requiere los oficios de esta Corte con el objeto de obtener del Gobierno de la República de Italia, un pronunciamiento acerca de la ampliación de la extradición del referido Klug Rivera, esta vez en relación con su eventual participación en el delito de homicidio simple en la persona de Adelino Pérez Navarrete, perpetrado el 18 de septiembre de 1973.

El Sr. Fiscal Judicial (S) de esta Corte Suprema, en su dictamen de trece de febrero de dos mil veinticuatro, fue de opinión que resulta procedente solicitar la ampliación de la extradición del requerido al Gobierno de la República de Italia.

Por decreto de quince de febrero de dos mil veinticuatro, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, estos autos se han originado por la petición del Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, señor Carlos Aldana Fuentes, quien solicita la ampliación de la extradición del ciudadano chileno Walther Klug Rivera, ello por estar investigando su participación en el



proceso penal que detalla y que corresponde al delito de homicidio en la persona de Adelino Pérez Navarrete.

Los hechos investigados dan cuenta que, *“el 15 de septiembre de 1973, en las cercanías de la cárcel de Mulchén, Adelino Alfonso Pérez Navarrete, dirigente vecinal del Partido Comunista, fue detenido por civiles y miembros de Carabineros de Chile y llevado a la Comisaría de Carabineros de esa localidad, sin orden legal o administrativa competente, y posteriormente trasladado al Liceo de Hombres, ubicado frente a la Plaza principal de Los Ángeles, el que también servía para cobijar a detenidos por razones políticas, a cargo del Ejército de Chile, lugar desde el cual, el día 18 de septiembre de ese año es llevado, junto a otros detenidos políticos al Regimiento de esa localidad, en camiones obtenidos por el Teniente Walther Klug Rivera, a cargo de los detenidos del precitado recinto militar, siendo colocados los prisioneros boca abajo, en el piso de los móviles, tendidos en forma horizontal, unos sobre otros, quedando Adelino Alfonso Pérez Navarrete boca abajo, en la primera fila del piso, soportando todo el peso de los demás prisioneros durante el trayecto y al llegar al sector de las caballerizas del Regimiento —donde se habilitaron unas celdas para recluir a los prisioneros políticos— se percataron que Adelino Alfonso Pérez Navarrete se encontraba fallecido, a causa de una hemorragia cerebral subaracnoidea, que le produjo una asfixia, por sofocación. El cuerpo, con identidad desconocida, fue enviado a la morgue ubicada en una dependencia del Hospital de Los Ángeles, pero tomadas las huellas necrodactilares y remitidas a la Oficina Central de Identificación del Registro Civil, se identificó como perteneciente a Adelino Alfonso Pérez Navarrete. Practicada autopsia, ésta concluyó que a pesar que (sic) no existe fractura de*



cráneo, la causa de muerte fue una hemorragia subdural y subaracnoidea acentuada. Días después, en el diario 'La Tribuna' de Los Ángeles de 6 de octubre de 1973, se informó que Adelino (Abelino) Pérez Navarrete, junto a otras tres personas, fueron dados de baja por haber atentado contra los centinelas encargados de su custodia y haber intentado fugas suicidas, ocultando la verdadera causa de la muerte de Pérez Navarrete”.

En este caso, de acuerdo a lo expresado por el Ministro Instructor, está establecida la identidad de la persona requerida, Walther Klug Rivera, cédula nacional de identidad N°6.036.211-4, Mayor del Ejército de Chile en retiro, actualmente cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco de Gendarmería de Chile, todo lo cual, en su momento, fue objeto de la petición de extradición a la República de Italia del requerido, bajo el N°16.734-2019 en la cual, por resolución de 18 de junio de 2019, se declaró por esta Corte la procedencia de la solicitud de extradición del requerido a la República de Italia por la responsabilidad que se le atribuyó, en calidad de cómplice, en el delito de secuestro calificado de Luis Cornejo Fernández, ilícito previsto en el artículo 141, inciso tercero del Código Penal, cometido el 18 de septiembre de 1973 (Rol 13.886, episodio Luis Cornejo Fernández), la que fue luego concedida por la Corte de Apelaciones de Bolonia, en Rol 33/2019 de 25 de septiembre de 2019, y confirmada por la Corte Suprema de Casación Italiana con fecha 3 de diciembre de 2019.

El extraditado fue puesto a disposición de nuestro país en su oportunidad por la causa antedicha y fue condenado a la pena de tres años y un día de presidio



menor en su grado máximo por el delito de secuestro calificado, en grado de consumado, de Luis Ángel Cornejo Fernández.

Segundo: Que, la extradición, como instituto relacionado con el Derecho Internacional, conforme a la clase de procedimiento que conoce el referido Ministro Instructor, está tratado en el Título VI, del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, en donde se establecen ciertos requisitos, tanto para la extradición activa como pasiva, no así respecto de la ampliación de la cual puede ser objeto la primera pero, a la cual, no obstante, deben aplicarse ciertos presupuestos que se extraen de los artículos 635 y 636 del referido cuerpo legal, a saber, una persecución de la responsabilidad de un individuo que se encuentre en país extranjero como inculpado de un delito que tenga señalada en la ley una pena privativa de libertad que en cualquiera de sus grados exceda de un año, en donde, además, estén acreditados los requisitos del artículo 274 del Código Adjetivo, pudiendo o no, haber sido procesado el inculpado ausente; a diferencia de la extradición propiamente tal, la cual requiere de este último trámite de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Penal (entre otras, SCS N°2.007-2009, de 9 de abril de 2009).

Tercero: Que, cabe consignar que entre Chile e Italia se suscribió un Tratado de Extradición en Roma, el veintisiete de febrero de dos mil dos y su Protocolo Adicional, firmado entre las mismas partes el cuatro de octubre de dos mil doce en Santiago, promulgados por Decreto número ochenta y cinco, de tres de mayo de dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial el cuatro de agosto del mismo año.



Cuarto: Que, en conformidad a lo pactado en dicho instrumento bilateral, los gobiernos de ambos países se han comprometido a *“entregar a la otra parte, de acuerdo a las normas y condiciones establecidas en el presente Tratado, las personas que se encuentren en su territorio y que sean buscadas por la Autoridad Judicial de la otra Parte, por haberse iniciado en su contra un procedimiento penal o por haber sido condenadas a una pena privativa o restrictiva de la libertad personal”*, siendo la extradición procedente cuando de conformidad con el artículo I del referido Tratado, según señala su artículo II, el delito por el cual se solicita sea punible conforme a la legislación de los dos Estados con pena restrictiva o privativa de la libertad personal cuya duración sea superior en su máximo a un año o más severa y no se encuentre en las situaciones de excepciones de su artículo IV, que se refieren a que la persona se encuentre sometida a procedimiento penal o ya fue juzgada por las autoridades judiciales de la parte requerida, a que el hecho por el cual se solicita la extradición se considere como un delito de carácter político, o exclusivamente militar y que no sea delito de acuerdo al derecho común, o si se estima que la persona reclamada será sometida a un procedimiento que no garantiza el respeto de los derechos mínimos de defensa. De igual forma no se concederá, si a la fecha de recepción de la solicitud la pena o la acción penal se encontraren prescritas, según la ley de una de las partes.

Quinto: Que, en este punto, corresponde tener presente que el artículo VII del instrumento internacional en estudio trata sobre el principio de especialidad, conforme el cual *“La persona extraditada no podrá ser sometida a restricciones o privaciones de la libertad personal con motivo de la ejecución de una pena, ni a otras medidas restrictivas o privativas de la libertad personal, por un hecho*



anterior a su entrega, distinto de aquel por el cual la extradición fue otorgada, salvo que: a) la Parte requerida lo consienta...”, agregando dicha norma que “Para obtener el consentimiento relativo al párrafo 1, letra a), la Parte adonde la persona ha sido extraditada deberá presentar una solicitud adjuntando la documentación especificada en el artículo X. Deberá, además, acompañar a dicha solicitud las declaraciones de la persona extraditada, efectuadas ante una Autoridad Judicial de dicha Parte, en relación a la solicitud de extensión de la extradición”.

Respecto al último requisito, Walther Klug Rivera fue notificado de la resolución que dispone solicitar a esta Corte la ampliación de su extradición, según consta a fojas 1.043, compareciendo durante el curso de la tramitación su defensa letrada, la cual concurrió a la vista de la causa y presentó sus alegatos en estrado, ante esta Corte.

Sexto: Que, puede extraerse como conclusión que el señalado principio de la especialidad de la extradición, a pesar de contener una limitación al Estado requirente en cuanto a juzgar sólo aquellos delitos por los cuales se haya concedido, admite su ampliación para comprender en ella otros ilícitos no considerados en el primer otorgamiento. Así, y dado que nuestro país se obligó a no procesar ni castigar al individuo de acuerdo a lo transcrito *ut supra*, es que resulta necesario solicitar al Estado requerido, una ampliación de la extradición ya concedida al nuevo delito descrito en la solicitud de ampliación, puesto que la falta de autorización impide dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Penal chileno, y los antecedentes aportados dan cuenta de la existencia de medios de convicción que satisfacen los requisitos establecidos



en el artículo 274 del texto legal citado y que permitirían el sometimiento a proceso del requerido.

Séptimo: Que, en este orden de cosas, todos los requisitos antes reseñados se cumplen en este proceso, ya que el delito referido en el motivo primero se perpetró en la Región del Biobío, República de Chile, por lo que corresponde conocer de éste a un tribunal chileno. Además, los hechos descritos son punibles de acuerdo con la legislación de ambos Estados y se encuentran sancionados con penas superiores a un año de privación de libertad; tampoco se trata de un delito político o conexo con otro de carácter político, ni puramente militar o contra la religión.

Finalmente, aunque se trata de un delito que se configuró en un tiempo en que podría discutirse la prescripción de la acción penal, es lo cierto que esa cuestión, atendida la naturaleza del hecho punible y la gravedad de la pena establecida por la ley (crimen), será una cuestión de fondo que sólo podrá dilucidarse cuando, aceptada la ampliación de la extradición, se dicte la correspondiente sentencia definitiva, de modo que *prima facie* no aparece clara y razonablemente establecida, en el presente asunto, la extinción del delito por el cual se requiere dicha ampliación.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 637, 638 y 639 del Código de Procedimiento Penal; y, lo informado por el Sr. Fiscal Judicial (S) de esta Corte Suprema, quien estima procedente la solicitud de ampliación de que se trata, se declara que **es procedente** solicitar al Gobierno de la República de Italia la **ampliación de la extradición** ya concedida del ciudadano chileno **Walther Klug Rivera**, cédula de Identidad número 6.036.211-4, Mayor de Ejército en retiro,



respecto del delito de homicidio simple en la persona de Adelino Pérez Navarrete, investigado en el proceso N°3-2011 (acumulado N°4-2021), que instruye el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, señor Carlos Aldana Fuentes.

Para el cumplimiento de lo resuelto, diríjase oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se sirva ordenar se practiquen las diligencias diplomáticas que sean necesarias a dicho fin. Se acompañará al oficio copia del presente fallo y de los antecedentes principales en que se funda, del dictamen del señor Fiscal Judicial (S), de las disposiciones que establecen el ilícito, definen la participación del imputado, precisan la sanción y establecen normas sobre prescripción, con constancia de su notificación a quien corresponda, de los antecedentes sobre la identidad del requerido, su fotografía, en su caso, y de las disposiciones legales citadas en el presente fallo, con atestado de su vigencia.

Acordado con el voto en contra de los Ministros Sr. Valderrama y Sra. Gajardo, quienes fueron del parecer que, por ahora, no resulta procedente el pedido de ampliación de la extradición de Klug Rivera a la República de Italia, teniendo para ello presente que, en concepto de los disidentes, los antecedentes actualmente reunidos —y por los cuales se ha solicitado dictamen a esta Corte— resultan del todo febles para establecer el nexo causal entre la conducta atribuida al requerido y la muerte de la víctima.

Regístrese y devuélvase, en su oportunidad.

N°3.854-2024.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H., Ministro Suplente Roberto Ignacio Contreras O. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a cuatro de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

